

Señor  
JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA  
MOCOCA

HUGO SALAZAR PELAEZ, mayor de edad, domiciliado en Cali, identificado con la C.C. 14.961.435, Abogado Titulado legalmente autorizado con T.P. 11.972 del C.S.J., obrando en nombre y representación de JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ y de JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, en ejercicio de poder que me han otorgado y que acompaño a la presente, respetuosamente manifiesto a usted que en su nombre y representación promuevo Acción de Tutela contra el Departamento del Putumayo – Tesorería General del Departamento vinculando a VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI, quien es mayor de edad y domiciliada en Mocoa – Putumayo, Tesorera General, respecto del Proceso de Jurisdicción Coactiva, Demandante. Departamento del PUTUMAYO, Demandado: Compañía Mundial de Seguros, Consorcio Vías Terciarias y Otros, para que de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución de 1991, el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes y aplicables, les sean protegidos los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, a LA DEFENSA, al ACCESO A LA JUSTICIA, al PRECEDENTE JUDICIAL y a la IGUALDAD.

Fundamento la presente petición así:

1.- HECHOS.

1.1.- Mediante documento privado de fecha 26 de junio de 2020 se modificó el CONSORCIO VIAS TERCIARIAS contratista dentro de Contrato 1225 del 28-12-2018, celebrado entre este CONSORCIO y el Departamento del Putumayo, cuyo objeto fue el mejoramiento de vías terciarias para una paz estable y duradera en los municipios del departamento de Putumayo.

1.2.- Según documento oportuna y adecuadamente conocido por el Contratante, el mencionado Consorcio VIAS TERCIARIAS se encuentra conformado así:

INTEGRANTE	Nota	PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE
JESUS FRANCO YELA RODRIGUEZ	(1)	23%	Jesús Franco Rodríguez

CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS	(2)	10%	Johana Andrea Posada Prieto
CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS	(2)	10%	Jaime Andrés Carmona Suarez
ARIEL NARVAEZ DELGADO	(1)	20.5%	Ariel Narváez Delgado
HERNAN NARVAEZ DELGADO	(1)	18%	Hernán Narváez Delgado
JMY CONSTRUCCIONES SAS	(2)	15.5%	Mónica Alexandra Yela Getian
S&S PETROL SAS	(2)	3%	Luis Alfredo Muñoz Becerra

(1): Persona Natural.  
(2): Persona Jurídica.

1.3.- Como **Representante del Consorcio** fue designado el señor **ARIEL NARVAEZ DELGADO**, identificado con C.C. 12.745.251.

1.4.1.- Mediante Resolución 021 del 21-04-2023 el Jefe de la Oficina de Contratación del Departamento del Putumayo *"Por medio de la cual se declara l siniestro con cargo al amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo otorgado mediante Seguro de Cumplimiento a favor de entidades Estatales No. NB-100100416 que garantiza el Contrato de Obra Pública No. 1225 de 2018 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"*, resolvió:

**ARTICULO PRIMERO.** Declarar de conformidad con la parte motiva de este acto administrativo que el contratista **CONSORCIO VIAS TERCIARIAS** identificado con NIT 9013409556, representado legalmente por el señor **ARIEL NARVAEZ DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía no. 12.745.251 y conformado por I) ... .. II) **CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS**, con NIT 900.951.327-8, representada legalmente por **JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 14.465.639**, con un porcentaje de participación del **DIEZ POR CIENTO (10%)**. III) **CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS**, con NIT 900.825.192-1, representada legalmente por **JOHANA ANDREA POSADA PRIETO** identificada con cédula de ciudadanía No. 38.561.793 No. 38.561.793, con un porcentaje de participación del **DIEZ POR CIENTO (10%)**, IV) ... .., V) ... .., VI) ... .. y VII) ... .. **incumplió** de manera grave sus obligaciones legales y contractuales en lo que al manejo del anticipo se refiere pactadas en el Contrato de Obra Pública 1225 de 2018 cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**.

**ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR OCURRIDO EL SINIESTRO ... ..**

**ARTÍCULO TERCERO: El CONSORCIO VÍAS Terciarias**, identificado con NIT 9013409556 se encuentra obligado a pagar los valores señalados en los artículos anteriores ... ..

... ..  
" ... ..  
... ..

1.4.2.- Mediante Res. 022 del 12 de mayo de 2023 *"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No.021 DEL 2023 ... .."*, este funcionario resolvió:

**ARTÍCULO PRIMERO. \_ CONFIRMAR** la Resolución No. 021 del 21 de Abril de 2023 por las razones expuestas en el presente acto administrativo.

... ..  
" ... ..  
... ..

1.4.3.- Destacamos que tanto en la Resolución 021/2023 como en la Resolución 022/2023, se endilga la responsabilidad singular y expresamente al CONSORCIO VIAS Terciarias. La mención que se hace de los integrantes del Consorcio (personas naturales y personas jurídicas) es meramente a título informativo. Y en manera alguna se vincula a JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, como personas naturales; simplemente se les menciona como representantes legales de sendas sociedades (personas jurídicas) que hacen parte del Consorcio.

1.5.1.- Por comunicación recibida del Bancolombia en julio de 2024 dirigida a JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ, donde anunciaba la práctica de una medida cautelar de embargo y secuestro (retención dineros) de los productos financieros de mis representados en tal entidad bancaria, éstos tuvieron conocimiento de la existencia de la Resolución 059 del 24 de junio de 2024 según la cual, textualmente, se resolvía:

*"PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO por la vía administrativa coactiva, a favor del DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y a cargo de ... .., CONSTRUCCIONES y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS, Nit 900.951.327-8, R/L JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 14.465.639, COSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX, Nit 900.825.192-1, R/L JOHANA ANDREA POSADA PRIETO identificada con cédula No. 38.561.793, ... .. por las siguientes sumas de dinero:*

- 1° ... ..
- 2° ... ..
- 3° ... ..

*SEGUNDO: DECRETAR como medida cautelar, el embargo de los bienes de titularidad de ... CONSTRUCCIONES y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS, Nit 900.951.327-8, R/L JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 14.465.639, COSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX, Nit 900.825.192-1, R/L JOHANA ANDREA POSADA PRIETO identificada con cédula No. 38.561.793, ... .., conforme lo dispone el artículo 837 del Estatuto Tributario, tales como inmuebles, muebles, los dineros depositados en las cuentas de ahorro o corriente a nombre del deudor y depósitos de dinero que tenga en las cuentas de ahorro y/o corrientes de que sea titular el ejecutado en las oficinas principales, sucursales y agencias de las entidades Bancarias de todo el país y los que se llegaren a depositar hasta la concurrencia de DIECISEIS MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VENTIDOS PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE (\$16.509.304.622.8); Esta medida comprende también los dineros que llegaren a depositarse a cualquier título, lo mismo que los rendimientos que ellos produzcan, así mismo los honorarios y salarios que reciba el deudor, conforme a lo dispuesto en el artículo 593 No. 10 del Código General del Proceso, a excepción de los bienes inembargables consagrados en la ley.*

1.5.2.- Dada la actuación de Bancolombia, que perfeccionó la orden de embargo y secuestro mencionada considerando para tales efectos que dicha medida también cobijaba al señor JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ y a la señora JOHANA ANDREA POSADA PRIETO como personas naturales, a pesar de la interpretación gramatical, lógica y jurídica que claramente se desprende de dicho contenido, que sólo ordena la medida en contra de las personas naturales y jurídicas que integran el **Consorcio Vías Terciarias** y del **Representante de este Consorcio**,

No habiendo sido vinculados previamente como personas naturales ni notificados en tal calidad de providencia anterior alguna, se solicitó la aclaración de la misma a la entidad territorial cuestionada.

1.6.- En respuesta, según comunicación TGD-1510 del 12 de agosto de 2024, la Tesorera General del Departamento resolvió **Negar** dicha aclaración bajo los supuestos (resumidos) de que tal entidad tenía la facultad de perseguir coactivamente al recurrente:

"[...]"

*Que la administración determina **NEGAR** esta solicitud toda vez que se puede determinar que si es posible ordenar medida cautelar de embargo contra el representante legal del consorcio bajo el entendido de que son estos quienes deben encargarse del cumplimiento del objeto social de las obligaciones contractuales tal y como lo expresa las diferentes normativas y principios que deben ser considerados:*

*... .." (subraya fuera de texto).*

Según su expresión, la medida cautelar (y la persecución coactiva) sí es posible ordenarla contra el **representante legal del Consorcio**. Pero esa representación legal se encuentra en cabeza de ARIEL NARVAEZ DELGADO, identificado con C.C. 12.745.251, situación absolutamente conocida por la accionada. Ni el señor

JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ ni la señora JOHANA ANDREA POSADA PRIETO han sido ni son **Representantes Legales del Consorcio Vías Terciarias, ni hacen parte, como personas naturales, de tal asociación empresarial.** Por tanto, no puede (salvo vías de hecho), sin violentar los derechos fundamentales de mis representados, perseguir coactivamente a JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO y mucho menos decretar en su contra medidas cautelares.

1.7.- Mediante escrito presentado oportunamente el 16 de septiembre de 2024 se interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación buscando que se modificaran las providencias atacadas con el fin de que fueran aclaradas en el sentido de excluir al señor JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ y a la señora JOHANA ANDREA POSADA PRIETO como sujetos pasibles de la actuación coactiva del Departamento del Putumayo – Tesorería General y consecuentemente de las injustas e ilegales medidas cautelares deprecadas toda vez que ninguno de ellos, como persona natural, hace parte del CONSORCIO VIAS TERCIARIAS y por tanto, no asiste a su cargo ninguna responsabilidad, ni son solidarios, ni codeudores, ni fiadores, ni son titulares de obligación alguna para con el Departamento del Putumayo ni para ante la Tesorería General de ese Departamento.

1.8.- Mis representados, a través de apoderado judicial, interpusieron Acción de Tutela contra el Departamento del Putumayo y el Grupo Bancolombia (vinculando al efecto al señor Juan Carlos Mora Uribe en su calidad de Presidente de su Junta Directiva) en procura de que les fuera tutelado el Derecho al Debido Proceso y con fundamento en hechos parcialmente similares a los aquí tenidos en cuenta. La misma fue admitida el 09 de octubre de 2024.

1.9.- El Juez Primero Civil Municipal de Mocoa, Putumayo, a quien por reparto correspondió dicha tutela, en providencia fechada 24 de octubre de 2024 resolvió:

**" PRIMERO: DENEGAR** por improcedente la acción de tutela instaurada por la parte activa, en lo relacionado con el amparo fundamental al debido proceso administrativo.

**SEGUNDO:TUTELAR** el derecho fundamental de petición de los señores JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ identificado con la C.C. No. 14.465.639., y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO identificada con la C.C. No. 38.361.793 con relación a los recursos de reposición y subsidiarios, formulados contra los denominados "oficios 1510 y 1511", emitidos por la Tesorería del accionado Departamento del Putumayo.

**TERCERO:** Para hacer efectivo lo anterior, **ORDENAR** al accionado **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**, a través de su **REPRESENTANTE LEGAL**, o quien haga sus veces, que en el término de **CUARENTA Y OCHO HORAS (48)**, contadas a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a resolver los recursos de reposición y subsidiarios, formulados contra los denominados "oficios 1510 y 1511", emitidos por la dependencia Tesorería del Ente territorial accionado, radicados en la fecha 26 de agosto del año 2024.

... .."

1.10.- Mediante Resolución 158 del 17 de octubre de 2024 “*POR MEDIO DE LA CUAL RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO DE APELACION CONTRA LA RESOLUCION No.059 DEL 24 DE JUNIO DE 2024 y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS OFICIO TGD-1510 Y TG 1511 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2024*” la TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO resolvió:

**"PRIMERO: NEGAR** el recurso de reposición en subsidio el de apelación (SIC) interpuesto por JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, contra el mandamiento de pago resolución No 059 del 24 de junio de 2024 y los actos administrativos oficios TGD-1510 y TGD 1511 del 12 de agosto de 2024, expedidos dentro del proceso 024-007, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

**SEGUNDO: ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCION,** del proceso N.º 2024-007, adelantados contra la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, CONSORCIO VIAS TERCIARIAS con Nit 901.240.9556 y OTROS.

**TERCERO: NOTIFICAR,** el contenido de la presente resolución a los señores JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, en calidad de representantes legales de CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA LFA Y OMEGA SAS. Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS., o a su apoderado conforme lo establece el artículo 565 del E.T., modificado por el artículo 45 de la ley 1111 de 2006 y 569 de E.T., advirtiéndole que contra la presente no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 833-1 del Estatuto Tributario."

1.11.- En cuestionable actitud, BANCOLOMBIA implementó la medida cautelar ordenada ilegal e injustamente por la Tesorera Departamental del Putumayo, interpretando que la misma cubría los productos financieros de mis representados. Por ello, retuvo y ha continuado reteniendo los dineros existentes en tales cuentas según el siguiente detalle:

TITULAR	PRODUCTO	NUMERO	MEDIDA	FECHA	VALOR \$
JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ	CUENTA CORRIENTE	061 29398748	EMBARGO RETENCION DINERO –	05-09-2024	5.973
				09-09-24	802.808
				19-09-24	398.412
				30-09-24	50.198.406
JOHANA ANDREA POSADA PRIETO	CUENTA DE AHORROS	912 60010081	EMBARGO RETENCION DINERO –	15-07-24	795.061

2.- DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES VIOLADOS

La actuación contra juris de la entidad territorial ha violentado simultánea y gravemente varios derechos constitucionales fundamentales de mis poderdantes.

## 2.1.- VIOLACION AL DEBIDO PROCESO. Art. 29 Constitución Política.

***"El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.***

*... .."*

***"El debido proceso administrativo. El debido proceso es un derecho fundamental. Posee una estructura compleja, en tanto se compone por un plexo de garantías que deben ser observadas en todo procedimiento administrativo o judicial, escenarios en los que operan como mecanismo de protección a la autonomía y libertad del ciudadano y límite al ejercicio del poder público. Por ese motivo, el debido proceso es también un principio inherente al Estado de derecho, cuyas características esenciales son el ejercicio de funciones bajo parámetros normativos previamente establecido y la erradicación de la arbitrariedad. Así lo explica la Corte:***

*"... el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio de ius puniendi del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos."*

*"En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso como el conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la ley, que deben concatenarse al adelantar todo proceso judicial o administrativo. Entre estas se cuentan el principio de legalidad, el derecho al acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de los derechos humanos, el principio del juez natural, la garantía de los derechos de defensa y contradicción, el principio de doble instancia, el derecho de la persona de ser escuchada y la publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas en esos procedimientos." (C. Const., Sent C-34, ene. 29/2014 M.P. María Victoria Calle Correa).*

El Departamento del Putumayo, a través de la actuación de su Tesorera General, ha desconocido flagrantemente las leyes que rigen las situaciones descritas en los hechos de la presente actuación, así:

2.1.1.- Cometiendo un "error" inexcusable la Tesorera General del Departamento del Putumayo confunde la representación legal de un consorcio con la representación legal de un consorciado. Y le extiende a este la responsabilidad que por ley y jurisprudencia pacífica de las Altas Corte sólo es aplicable al representante legal del consorcio. En efecto, el representante legal del Consorcio VIAS TERCARIAS es ARIEL NARVAEZ DELGADO, y, por ende, quien podría ser perseguido en su patrimonio personal si acaso llegasen a materializarse los supuestos exigidos para tipificar responsabilidad; Pero ni JAIME ANDRES

CARMONA SUAREZ ni JOHANA ANDREA POSADA PRIETO tienen ni han tenido la representación legal del Consorcio.

2.1.2.- Confunde la autonomía e individualidad de una persona natural con el rol que protagoniza el representante legal de una persona jurídica: Persigue a JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ y a JOHANA ANDREA POSADA PRIETO en aspectos patrimoniales de cada uno de ellos, personas naturales, so pretexto de hacerlos responsables del actuar de la empresa respectiva, por ser sus representantes legales.

2.1.3.- Entratándose de actos administrativos, y en contravía de la ley, niega la procedencia del recurso de reposición y el subsidiario de apelación, oportuna y adecuadamente presentados, desconociendo el mandamiento legal regulatorio de la “vía gubernativa” que permite la interposición de tales recursos.

2.1.4.- No notifica sus decisiones: en la Res. 158/2024 notifica a los señores JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ y a JOHANA ANDREA POSADA PRIETO en su condición de representantes legales de las sociedades CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS. Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS., y no lo hace respecto de mis poderdantes como personas naturales, calidad en la cual interpusieron los recursos mencionados.

2.1.5.- A pesar de haber actuado el suscrito como apoderado debidamente constituido, no se me ha reconocido personería para actuar.

2.1.6.- Tergiversa el alcance y contenido de lo dispuesto en las Res. 021 y 022 de 2023 toda vez que en aquellas el Jefe de la Oficina de Contratación del Departamento del Putumayo resuelve declarar que el CONSORCIO VIAS TERCIARIAS incumplió *de manera grave sus obligaciones legales y contractuales en lo que al manejo del anticipo se refiere pactadas en el Contrato de Obra Pública 1225 de 2018 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO*”, indicando quienes integran el Consorcio y quiénes son sus representantes legales, pero la TESORERA en la Res. 059 de 2024, extiende la responsabilidad del Consorcio no sólo a sus integrantes, sino que la incluye a personas naturales que no hacen parte del mismo, sin que medie actuación administrativa alguna que establezca las circunstancias de modo, tiempo y lugar de tal responsabilidad, partiendo de una aparente aplicación automática de la responsabilidad solidaria y en agresiva conducta frente a terceros, personas naturales, no integrantes del Consorcio.

2.1.7.- Cambia sin razón alguna el grado de responsabilidad: el jefe de la Oficina de Contratación del Departamento del Putumayo lo califica como “grave” mientras que la Tesorera lo convierte en “dolo”, pero sin sustentarlo ni mucho menos debatirlo y sin dar oportunidad alguna de defensa a mis representados.

2.2.- VIOLACION AL DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. Art. 229 Constitución Política de Colombia



*"Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado."*

**"El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.**

... ..

*Se quiere con esta norma permitir al ciudadano dentro del ámbito de un Estado democrático y participativo, tener la oportunidad cuando lo considere necesario y oportuno, de acudir a la administración de justicia, en cualquiera de sus expresiones o manifestaciones.*

*Pero este acceso debe estar enmarcado dentro de unos lineamientos básicos, como lo son el respeto al derecho a un debido proceso y a los principios en el incorporados, como lo son el de legalidad, la buena fe y la favorabilidad, entre otros. A su vez, surge el deber del Estado, en cabeza de la administración de justicia, una vez se ha tenido acceso a ella, conforme a lo dispuesto en el artículo 228 de la Carta, de que sus decisiones sean públicas y permanentes, con la prevalencia del derecho sustancial, al igual que observar en las actuaciones judiciales los términos judiciales con diligencia. De ello surgen entonces principios que se deben cumplir en las actuaciones judiciales, como son el de eficacia, la publicidad, la permanencia y la celeridad." (c. Const. Sent T-572, oct. 26/92. M.P. Jaime Sanín Greiffenstein).*

Por regla general, contra los actos definitivos proceden los recursos de reposición y el de apelación. Como se ha relatado en el presente escrito, la Tesorera General del Departamento del Putumayo resolvió **"NEGAR"** el recurso de reposición en subsidio de el de apelación interpuesto por JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ Y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, ... .." tornando en definitiva su decisión y violentando de manera inaceptable el derecho de acudir a la justicia del que son titulares mis representados.

Obsérvese que el Operador Administrativo no resuelve no revocar ni modificar su decisión, sino que determina **negar los recursos**, por tanto, quitarles a los poderdantes el derecho constitucional fundamental mencionado.

2.3.- VIOLACION AL DERECHO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL A LA PERSONALIDAD JURIDICA. Art. 14 Constitución Política de Colombia:

*"Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica."*

*"El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica tiene por objeto garantizar a todo ser humano u protección en el ámbito jurídico, de tal manera que se le asegure la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Se trata de garantizar a nivel constitucional el reconocimiento de toda persona como sujeto de derechos, concepto que ha tenido un amplio desarrollo en el derecho civil, cuyo contenido se identifica con los denominados atributos de la personalidad, vale decir, el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio, el estado civil y la capacidad." (Los Derechos Fundamentales en la Constitución de 1991. Manuel José Cepeda, Ed. Temis, 1992).*

El ejercicio de este derecho permite al ser humano adquirir derechos y contraer obligaciones. Por ello mis representados tienen su patrimonio personal a su plena y total disposición sin que ello implique que al ejercer cualquier cargo en representación de un tercero (persona natural o jurídica) su patrimonio propio se confunda y/o fusione con el de estos. Lo mismo puede predicarse respecto de las obligaciones de cada cual: unas son las de la persona natural y otras las de la persona jurídica sin que sea legítimo aquellas en estas. Por ello, la Tesorera General del Departamento del Cauca desconoce de manera grave este derecho fundamental cuando responsabiliza a JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ y JOHANA ANDREA OSADA PRIETO, personas naturales, de las eventuales obligaciones que por solidaridad pudieran corresponder a las sociedades por ser integrantes del Consorcio y ellos representantes legales de las nombradas sociedades.

#### 2.4.- VIOLACION A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES LA INTIMIDAD, A LA HONRA Y AL TRABAJO. Artículos 21, 25, 53 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA.

Como consecuencia de la ilegal e injusta persecución por vía coactiva y ante la materialización de las medidas cautelares ordenadas, el buen nombre y la buena fama comercial, profesional y crediticia de mis representados ha sufrido un irreparable daño sin que haya causa legítima por la que ellos deban soportarlo.

Su cuestionamiento financiero así como la arbitraria determinación de acusarlos de haber actuado dolosamente conlleva a que quienes han conocido aquellas resoluciones y las ordenes de su cumplimiento tengan elementos falaces y errados que podrían distorsionar sensible la percepción social que de mis representados tienen.

### 3.- PETICION

Con fundamento en los hechos antes expuestos, acorde con la jurisprudencia mencionada y cumplidos los trámites establecidos en el D. 2591 de 1991 y demás normas concordantes y aplicables, respetuosamente solicito se ordene al Departamento del Putumayo – Tesorería General del Departamento – VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI se modifique, aclare y/o revoque parcialmente la Resolución 059/2024, la Resolución 158/2024 en el sentido de excluir total y definitivamente, como sujetos pasivos del mandamiento de pago allí contenido a los señores JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, en su calidad de personas naturales no pasibles de tal cobro coactivo y se revoquen totalmente los Oficios TGD 1510/2024 Y 1511/2024, como consecuencia de reconocer y conceder a mis representados el amparo fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la defensa, por las razones aquí expuestas.

Como consecuencia, se ordene al mencionado ente territorial que, en un lapso no mayor a cuarenta y ocho (48) proceda de conformidad, excluya a mis representados y comunique de manera inmediata el levantamiento de las medidas cautelares a las entidades a las que originalmente extendió su decisión y se ordene a las mismas las medidas que hubieren implementado y el reintegro de todos los bienes y dineros retenidos.

#### 4.- MEDIDA PROVISIONAL.

Respetuosamente solicito al Despacho ordenar la **suspensión inmediata** de las medidas cautelares implementadas para evitar el incremento de los perjuicios causados y que se causen otros daños.

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares, en los casos en que así se autoriza.

El Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, establece que el juez constitucional cuando lo considere necesario y urgente para proteger un derecho fundamental “*suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere*” y, dicha suspensión puede ser ordenada de oficio o a petición de parte, para el efecto, el artículo 7° de la mentada normatividad dispone:

***“Artículo 7°. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.***

*Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.*

*La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.*

*El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.*

[...]" (Resaltado fuera de texto)

#### 5.- NOTIFICACIONES.

Para todos los efectos del caso mis representados pueden ser citados y/o notificados así:

JAIME ANDRES CARMONA SOTO, correo electrónico  
[jaimecarmona82@yahoo.com](mailto:jaimecarmona82@yahoo.com)

JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, correo electrónico  
[johanaandpp@hotmail.com](mailto:johanaandpp@hotmail.com)

Al Departamento del Putumayo Tesorería General del Putumayo – Tesorera General  
VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI en [cobro.coactivo@putumayo.gov.co](mailto:cobro.coactivo@putumayo.gov.co)

El suscrito, a través de mi canal electrónico [hugosalazarpelaez@gmail.com](mailto:hugosalazarpelaez@gmail.com)

## 6.- PRUEBAS

Acompaño a la presente para que se decreten, practiquen y tengan como tales los siguientes documentos:

- 6.1.- Documento constitución del Consorcio VIAS TERCARIAS.
- 6.2.- Res. 021/2023.
- 6.3.- Res. 022/2023
- 6.4.- Comunicación BANCOLOMBIA.
- 6.5.- Solicitud de aclaración.
- 6.6.- Poder para la actuación.
- 6.7.- Recurso de Reposición y en subsidio Apelación.
- 6.8.- Acción de Tutela.
- 6.9.- Auto admite Tutela.
- 6.10.- Sentencia de Tutela.
- 6.11.- Resol. 158/2024.
- 6.12.- Oficio 1510/2024
- 6.13.- Oficio 1511/2024
- 6.14.- Certificaciones de BANCOLOMBIA:
  - Extractos, comunicaciones.
- 6.15.- Resolución 059/2024

## 7.- DECLARACION JURAMENTADA.

Mis representados, a través de apoderado judicial, interpusieron Acción de Tutela contra el Departamento del Putumayo y el Grupo Bancolombia (vinculando al efecto al señor Juan Carlos Mora Uribe en su calidad de presidente de su Junta Directiva) en procura de que les fuera tutelado el Derecho al Debido Proceso y con fundamento en hechos parcialmente similares a los aquí tenidos en cuenta. La misma fue admitida el 09 de octubre de 2024 y fallada por el Juzgado Primero Civil Municipal de Mocoa el 24 de octubre de 2024 mediante la cual decidió:

**" PRIMERO: DENEGAR por improcedente la acción de tutela instaurada por la parte activa, en lo relacionado con el amparo fundamental al debido proceso administrativo.**

**SEGUNDO:TUTELAR el derecho fundamental de petición de los señores JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ identificado con la C.C. No. 14.465.639., y JOHANA ANDREA POSADA PRIETO identificada con la C.C. No. 38.361.793 con relación a los recursos de reposición y subsidiarios, formulados contra los**

denominados "oficios 1510 y 1511", emitidos por la Tesorería del accionado Departamento del Putumayo.

TERCERO: Para hacer efectivo lo anterior, **ORDENAR** al accionado **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**, a través de su **REPRESENTANTE LEGAL**, o quien haga sus veces, que en el término de **CUARENTA Y OCHO HORAS (48)**, contadas a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a resolver los recursos de reposición y subsidiarios, formulados contra los denominados "oficios 1510 y 1511", emitidos por la dependencia Tesorería del Ente territorial accionado, radicados en la fecha 26 de agosto del año 2024.

La presente actuación, entonces, busca la protección de los derechos conculcados por la decisión administrativa contenida en la Resolución 158 fechada 17 de octubre de 2024, resolución que no era conocida al momento de la actuación citada supra tratándose, por lo tanto, de la materialización del accionar censurable que mediante esta resolución da respuesta a los recursos de reposición y subsidiario de apelación interpuestos y a los que hace referencia la orden contenida en los puntos segundo y tercero arriba transcritos.

#### 8.- MECANISMO TRANSITORIO.

La presente actuación busca evitar el incremento pernicioso del daño inmediato e irreparable que ya se está causando.

*"De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente, excepcional y residual a través del cual se obtiene la protección inmediata de los derechos fundamentales, constituyéndose en un medio eficaz para evitar la arbitrariedad de la Administración. Este medio de defensa judicial se rige por los principios de subsidiariedad e inmediatez. La subsidiariedad es un requisito fundamental de procedibilidad de la acción de tutela, el cual hace referencia a que el interesado debe agotar los medios ordinarios de defensa cuando estos sean oportunos y eficaces, de modo que asegure una adecuada protección de sus derechos, excluyendo la posibilidad de usar el recurso de amparo como primera opción ya que resulta improcedente... La acción de tutela es improcedente cuando el sistema normativo establece otros mecanismos para la protección de los derechos. Sin embargo, el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991 estipuló que el amparo es procedente de manera transitoria cuando los medios de defensa no son eficaces para evitar un perjuicio irremediable."*

Atentamente,

HUGO SALAZAR PELAEZ  
C.C. 14.961.435  
T.P. 11.972 C.S.J.



Hugo Salazar Pelaez &lt;hugosalazarpelaez@gmail.com&gt;

**PODER TUTELA**

2 mensajes

Johana Andrea Posada &lt;johanaandpp@hotmail.com&gt;

7 de noviembre de 2024, 8:15

Para: "hugosalazarpelaez@gmail.com" &lt;hugosalazarpelaez@gmail.com&gt;

Señor

JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA  
CALI

JOHANA ANDREA POSADA PRIETO, mayor de edad, domiciliada en Cali, identificada con la C.C. 38.561.793 actuando en mi propio nombre y representación, respetuosamente manifiesto a Usted que por medio del presente escrito confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente, al doctor HUGO SALAZAR PELAEZ, mayor de edad, domiciliado en Cali, identificado con cédula de ciudadanía N° 14.961.435 de Cali, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional N° 11.972 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie, tramite y lleve hasta su culminación una acción de tutela en contra **DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO – TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO - VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI TESORERA GENERAL**, para que de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución de 1991, el Decreto 2591 de 1991, Ley 1266 de 2008 y demás normas concordantes y aplicables, me sean protegidos los derechos fundamentales al **Derecho de Petición, al Debido Proceso, al Acceso a la Justicia, al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica, a la Libertad de Asociación, a la Igualdad, a la Intimidad, a la Honra y al Trabajo.**

El apoderado cuenta con las más amplias facultades para el ejercicio del presente poder, en especial las de recibir, transigir, conciliar, sustituir, reasumir y desistir, y en general, ejecutar los actos y ejercer las facultades propias y necesarias para el fiel cumplimiento de su mandato, acorde con los alcances y contenidos del artículo 77 del CGP y demás normas concordantes y aplicables.

Manifiesto al Despacho que el canal electrónico del apoderado es [hugosalazarpelaez@gmail.com](mailto:hugosalazarpelaez@gmail.com)

El de la suscrita, [johanaandpp@hotmail.com](mailto:johanaandpp@hotmail.com)

Del Señor Juez, atentamente

JOHANA ANDREA POSADA PRIETO  
C.C. 38.561.793

Acepto,

HUGO SALAZAR PELAEZ  
C.C. 14.961.435

T.P. 11.972 C.S.J.

---

**Hugo Salazar Pelaez** <hugosalazarpelaez@gmail.com>  
Borrador a: Johana Andrea Posada <johanaandpp@hotmail.com>

7 de noviembre de 2024, 9:01

Buenos días  
Confirmo recibido  
Gracias

[El texto citado está oculto]



Hugo Salazar Pelaez &lt;hugosalazarpelaez@gmail.com&gt;

**Rv: Poder**

2 mensajes

**jaime carmona** <jaimecarmona82@yahoo.com>  
Responder a: jaime carmona <jaimecarmona82@yahoo.com>  
Para: Hugo Salazar Pelaez <hugosalazarpelaez@gmail.com>

13 de noviembre de 2024, 11:42

[Yahoo Mail: busca, organiza, toma el control de tu buzón](#)

----- Mensaje reenviado -----

**De:** "jaime carmona" <jaimecarmona82@yahoo.com>  
**Para:** "hugosalazarpelaez@gmail.com" <hugosalazarpelaez@gmail.com>  
**Cc:**  
**Enviado:** jue, 7 de nov de 2024 a la(s) 9:13 a. m.  
**Asunto:** Poder

Señor  
JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA  
CALI

JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ, mayor de edad, domiciliado en Cali, identificado con la C.C. 14.465.639 actuando en mi propio nombre y representación, respetuosamente manifiesto a Usted que por medio del presente escrito confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente, al doctor HUGO SALAZAR PELAEZ, mayor de edad, domiciliado en Cali, identificado con cédula de ciudadanía N° 14.961.435 de Cali, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional N° 11.972 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie, tramite y lleve hasta su culminación una acción de tutela en contra DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO – TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI TESORERA GENERAL, para que de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución de 1991, el Decreto 2591 de 1991, Ley 1266 de 2008 y demás normas concordantes y aplicables, me sean protegidos los derechos fundamentales al Derecho de Petición, al Debido Proceso, al Acceso a la Justicia, al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica, a la Libertad de Asociación, a la Igualdad, a la Intimidad, a la Honra y al Trabajo.

El apoderado cuenta con las más amplias facultades para el ejercicio del presente poder, en especial las de recibir, transigir, conciliar, sustituir, reasumir y desistir, y en general, ejecutar los actos y ejercer las facultades propias y necesarias para el fiel cumplimiento de su mandato, acorde con los alcances y contenidos del artículo 77 del CGP y demás normas concordantes y aplicables.

Manifiesto al Despacho que el canal electrónico del apoderado es [hugosalazarpelaez@gmail.com](mailto:hugosalazarpelaez@gmail.com)

El del suscrito, [jaimecarmona82@yahoo.com](mailto:jaimecarmona82@yahoo.com)

Del Señor Juez, atentamente

JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ  
C.C. 14.465.639

Acepto,

HUGO SALAZAR PELAEZ  
C.C. 14.961.435  
T.P. 11.972 C.S.J.

[Yahoo Mail: busca, organiza, toma el control de tu buzón](#)



13/11/24, 21:24

Gmail - Rv: Poder

**Hugo Salazar Pelaez** <hugosalazarpelaez@gmail.com>

13 de noviembre de 2024, 21:20

Para: Hugo Salazar Pelaez <hugosalazarpelaez@gmail.com>

[El texto citado está oculto]